
Venezuela: una revolución en crisis

Román D. Ortiz

Tres años después de su llegada al poder, el experimento político encabezado por el presidente Hugo Chávez y su revolución bolivariana presenta síntomas de agotamiento. En el frente político, la marcha masiva opositora del pasado 23 de enero ha puesto de manifiesto un aumento de la contestación antigubernamental. Al mismo tiempo, las magnitudes macroeconómicas apuntan a la posibilidad de una crisis fiscal y una quiebra del tipo de cambio que podrían tener consecuencias demoledoras sobre el nivel de vida de los venezolanos. Finalmente, en el frente externo, las filtraciones sobre los vínculos de sectores del gobierno venezolano y la guerrilla colombiana hacen poco por mejorar las ya deterioradas relaciones de Caracas con Bogotá y Washington. Este panorama tan poco halagüeño para el presidente Hugo Chávez suscita dos interrogantes: ¿cómo se ha llegado a este escenario de crisis? y, sobre todo, ¿cuál puede ser el desenlace de la presente crisis?

Para entender la trayectoria reciente de esta república caribeña de casi veinticinco millones de habitantes, es necesario volver tres años atrás para ver cuáles fueron las fuerzas que condujeron al arrollador triunfo electoral de Hugo Chávez en febrero de 1999 y con qué programa alcanzó la jefatura del Estado este antiguo teniente coronel de paracaidistas. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1999 en Venezuela otorgaron a la candidatura de Chávez un arrollador triunfo con un 56,20 por 100 de votos válidos emitidos. Este caudal de votos se vería todavía más acrecentado tras los comicios presidenciales de julio de 2000 donde Chávez cosechó un 59,75 por 100 de votos. Al menos tres factores explican la capacidad del ya entonces presidente para concitar tan amplio respaldo. Para empezar, se trataba de una reacción al enorme cansancio de los venezolanos con tres décadas de bipartidismo que había situado a la cabeza del país alternamente a los socialdemócratas de Acción Democrática y los socialcristianos de COPEI gracias a la práctica generalizada del clientelismo y la corrupción. Unos precedentes que hicieron al electorado extraordinariamente permeable a la retórica antipolítica y antipartidos de Hugo Chávez. Por otra parte, el discurso populista del ex-militar conectó con las expectativas frustradas de millones de venezolanos que habían crecido en la paradoja de que su país disfrutaba de una riqueza supuestamente ilimitada; pero su nivel de vida empeoraba de forma imparable desde mediados de los años 70. Esta aparente contradicción hizo creíbles las promesas de Chávez que culpaban al mal gobierno y la corrupción de ser los únicos responsables de las miserias de Venezuela y prometían el bienestar perdido a la población una vez que un nuevo sistema político justo y limpio fuese puesto en pie. Finalmente, la vinculación del ideario "chavista" a la figura de Bolívar hizo más atractiva esta oferta electoral para muchos votantes que asociaban al prócer con el proyecto de

una república venezolana convertida en un modelo de justicia y la libertad hacia el que mirase toda América Latina.

Pero si estas fueron las razones que empujaron a millones de venezolanos a votar por Chávez, el ex-militar llevó consigo al Palacio de Miraflores un proyecto ideológico muchos de cuyos rasgos chocaban con la cultura política tradicional de su país o resultaban contradictorios con las aspiraciones de sus votantes. El verdadero trasfondo ideológico de la "revolución bolivariana" de Hugo Chávez ha sido objeto de polémica antes y después de su acceso a la presidencia. Muchos analistas han sostenido que su mensaje "bolivariano" ha sido únicamente un reclamo para conseguir el sustento popular para conservar el poder. Pero lo cierto es que, por difusos que parezcan sus planteamientos, el presidente venezolano llegó al gobierno con un ideario que ha determinado su acción de gobierno hasta el punto de condenarle a enfrentarse con amplios sectores de la sociedad.

Dentro de este cuerpo doctrinal que ha presidido su trayectoria política, Chávez situó como principio básico la crítica a los principios de la democracia liberal. De hecho, las denuncias de la corrupción y la manipulación política de la etapa del bipartidismo venezolano fueron utilizadas como argumentos para realizar un cuestionamiento general de las instituciones políticas liberales. Desde su punto de vista, partidos y sistemas de representación eran instrumentos al servicio de oligarquías políticas para torcer la voluntad popular. De hecho, Chávez llegó a ser tan claro sobre estos planteamientos como para afirmar que "una democracia representativa no es verdaderamente buena" para Venezuela. En la mejor tradición de los populismos latinoamericanos, la ideología bolivariana propuso como alternativa una relación sin intermediarios del líder con las masas combinada con ciertas formas de democracia directa. Algunas de estas ideas alternativas se proyectaron sobre la elaboración de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, que adquirió un tono fuertemente presidencialista, creó un parlamento unicameral, sustituyó a los tres poderes tradicionales por un quinteto (ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral) e introdujo elementos de democracia directa como la posibilidad de revocar por medio de referéndums a los cargos electos.

En cualquier caso, pese a que estos planteamientos fueron bien recibidos en el contexto de la crisis del bipartidismo venezolano, a más largo plazo, las críticas a la democracia liberal chocaron con tradiciones fuertemente arraigadas entre la opinión pública venezolana. El juego de los grandes partidos venezolanos inaugurado con el pacto de Punto Fijo en 1958 estuvo cuajado de fallas, ineficiencias y corruptelas; pero supo dejar en el electorado del país caribeño un gusto por el debate político abierto y el disfrute de las libertades públicas. De hecho, incluso con la clase política tradicional todavía completamente desprestigiada, los resultados de una encuesta del grupo Consultores 21 publicados por el diario venezolano El Nacional en mayo de 2000 señalaba que un 52 por 100 de los jóvenes simpatizaba con alguna formación política. En este contexto, el discurso antiliberal de Chávez cosechó éxitos iniciales; pero su monopolización de las instituciones, sus esfuerzos por controlar los medios de comunicación, sus modales autoritarios en la conducción del gobierno y su crispación del

debate público encontraron el rechazo de un sector siempre creciente de la población con una cultura política moldeada por cuatro décadas de democracia.

Los planteamientos antiliberales del presidente Chávez también se manifestaron en el papel que otorgó a las Fuerzas Armadas dentro de la reformulación del régimen político acometida con la constitución de 1999. Frente a la posición apolítica tradicionalmente otorgada a las fuerzas armadas en las democracias, Chávez apostó por un estamento castrense ideologizado situado en el corazón del Estado como motor de su revolución. La politización de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) venezolanas era coherente con la trayectoria política del propio Chávez, que había participado en la creación del Movimiento Bolivariano Revolucionario Doscientos (MBR-200) como una célula de conspiración militar que estuvo en la base de la intentona golpista contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992. Con estos antecedentes, el ideario "chavista" se proyectó en la constitución bolivariana otorgando a las FAN una cierta capacidad de deliberación política y un amplio margen de autonomía frente a las autoridades civiles. Este nuevo papel político vino acompañado de la modificación de los programas de educación militar con el fin de otorgar espacio a la enseñanza de la "ideología bolivariana". Al mismo tiempo, se expandieron sus misiones castrenses al otorgar a las FAN un papel clave en la gestión de la administración pública y el desarrollo nacional. Como parte de este esquema, una buena cantidad de mandos en activo o retiro fueron situados en posiciones clave dentro de la estructura estatal venezolana. Al mismo tiempo, el gobierno Chávez lanzó los llamados Planes Bolívar, que detrajeron recursos de los municipios y estados venezolanos para asignárselos a las fuerzas armadas con el fin de que desarrollasen programas de obras públicas, sanidad, educación, etc.

Este protagonismo político otorgado por la doctrina "chavista" al estamento militar encontró una fuerte resistencia dentro de las FAN. Parte de esta oposición fue suscitada por aspectos concretos de las políticas de seguridad impulsadas por la administración Chávez. Así, por ejemplo, el proyecto gubernamental de impulsar la unificación de las distintas ramas del aparato de defensa venezolano suscitó fuertes reticencias de los servicios de menor tamaño como la Armada o la Fuerza Aérea ante el temor de ser situados bajo la hegemonía del más numeroso e influyente Ejército de Tierra. De igual modo, la idea contemplada por algunos sectores del régimen chavista de disolver la Guardia Nacional suscitó un profundo malestar dentro de este cuerpo responsable del mantenimiento del orden público. En cualquier caso, más allá de estos choques sobre cuestiones concretas, lo cierto es que el enfrentamiento entre un sector mayoritario de las FAN y el gobierno Chávez se nutrió de las profundas diferencias que separaban la cultura militar tradicional venezolana del modelo militar impulsado por la revolución bolivariana. Durante cuatro décadas, las fuerzas armadas de Caracas habían sido educadas en el sometimiento al poder civil y la dedicación profesional a la defensa nacional. De hecho, las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992 fueron episodios condenados al fracaso desde su mismo principio en la medida en que contaron con el repudio mayoritario del estamento castrense. En este contexto, las propuestas "chavistas" de politizar el cuerpo de oficiales y convertir las FAN

en el motor de la transformación social y económica del país encontraron la oposición de amplios sectores militares que veían estos cambios como una amenaza a los fundamentos de su institución.

El proyecto bolivariano también incluía cambios en la economía que provocaron fuertes resistencias en amplios sectores sociales. En términos generales, los planteamientos económicos del régimen fueron determinados por una serie de puntos de vista políticos que combinaban populismo y nacionalismo. El gobierno de Chávez apostó por sobrevaluar el bolívar frente al dólar de forma que el consiguiente abaratamiento de las importaciones permitiese contener una inflación que perjudicaba especialmente a los sectores populares sin necesidad de introducir reformas económicas con altos costes sociales. Al mismo tiempo, el régimen impulsó políticas de redistribución de la renta que incluían limitaciones sobre los derechos de propiedad y controles sobre la actividad económica privada. El ejemplo más visible de este tipo de iniciativas fue la llamada "Ley de Tierras", que prevé la expropiación y el reparto de los latifundios no explotados adecuadamente en opinión de los funcionarios gubernamentales. Paralelamente, el "chavismo" apostó por una vuelta al proteccionismo que permitiese el resurgimiento de la producción agrícola e industrial nacional orientada hacia el mercado interno. Como parte de este esquema de política económica, el Estado asumía un papel protagonista como instrumento para liderar los cambios necesarios para convertir la economía venezolana en un instrumento para el logro de la justicia social y el engrandecimiento nacional. En este sentido, la revolución bolivariana impulsó un crecimiento constante del gasto en los periodos fiscales 1999 (23%), 2000 (23%) y 2001 (29%). Estos fondos permitieron una expansión del gasto público en salarios y subvenciones. Además, se impulsaron programas intensivos de obras públicas y asistencia social a través de los mencionados Planes Bolívar y se concibieron macroproyectos de desarrollo como la activación económica del eje Orinoco-Apure. Detrás de este tipo de iniciativas, la eficiencia económica era subordinada a criterios estrictamente ideológicos. Los Planes Bolívar eran un esfuerzo por utilizar fondos públicos para conseguir la adhesión de las clases populares a la revolución a través de puesta en práctica de programas sociales gestionados que beneficiasen directamente a estos sectores. El desarrollo del eje Orinoco-Apure representaba la traducción económica de un viejo proyecto estratégico que pretendía asegurar el control del interior de Venezuela a través del poblamiento y la modernización productiva de estas cuencas fluviales.

Este esquema económico estuvo sostenido inicialmente por la espectacular bonanza petrolera que llegó a situar el barril de petróleo por encima de los 25 dólares a lo largo de los años 1999 y 2000. Sin embargo, el debilitamiento de la demanda de crudo durante el año 2001 asestó un fuerte golpe a los ingresos en divisas del Estado venezolano. Esta reducción de los ingresos tuvo un doble efecto. Por un lado, incrementó el déficit público, lo que tendió a establecer un techo sobre la capacidad del gobierno para continuar con la expansión del gasto público. De hecho, la carga del déficit público mejoró levemente entre 1999 y 2000 al reducirse del 2,6% al 1,7%; pero se agravó claramente en 2001 con una escalada hasta el 4,6. Al mismo tiempo, redujo el flujo de divisas lo que restó credibilidad a la capacidad del gobierno para mantener un dólar sobrevaluado. El

consiguiente debilitamiento del tipo de cambio del bolívar frente al dólar amenazó con encarecer las importaciones y poner en peligro el control de la inflación. Un riesgo que obligó a un incremento de los tipos de interés destinado a apuntalar el tipo de cambio y evitar el derrumbe de la moneda nacional.

Entretanto, la política económica del régimen bolivariano generó un creciente malestar social. La sobrevaloración del bolívar unida a la escalada de los intereses castigó duramente al sector exportador privado. Al mismo tiempo, la retórica populista del gobierno y la introducción de leyes opuestas a los intereses empresariales privados creó una crisis de confianza que se tradujo en una creciente fuga de capitales. En este contexto, el empresariado utilizó a sus instituciones gremiales para movilizarse en contra del gobierno. Así, la patronal venezolana conocida como Fedecámaras fue uno de los motores principales del paro general del 10 de diciembre y luego de las movilizaciones del 23 de enero. Este descontento se extendió también a los trabajadores. La falta de inversión privada y la quiebra del sector exportador bloqueó una recuperación estable del empleo. De hecho, pese al incremento del gasto público, el desempleo ya muy elevado en 1999 (13,5%) registró una cierta mejoría en el año 2000 (10,2%); pero posteriormente volvió a ascender (11,5%). Además, las mejoras salariales en el sector público, impulsadas inicialmente por el régimen, dieron pronto paso a un estancamiento en los ingresos de los trabajadores. En este contexto, la dirigencia sindical agrupada en la Central de Trabajadores Venezolana (CTV) resistió los intentos del satelizarla por parte del gobierno y se sumó a las movilizaciones contra el régimen "chavista".

Finalmente, los planteamientos internacionales de la ideología bolivariana también levantaron fuertes suspicacias entre países claves para la diplomacia de Caracas. La visión de Chávez sobre el papel de Venezuela en el mundo se dibujó en torno a tres principios básicos. Por un lado, una fuerte dosis de nacionalismo que reabrió contenciosos políticos y territoriales con países vecinos como Colombia o Guyana. Al mismo tiempo, un impulso a la integración política y diplomática latinoamericana bajo el liderazgo de Caracas como herencia del proyecto de unificación del continente concebido por Bolívar. Finalmente, una apuesta por promover un escenario global multipolar a través del respaldo a focos internacionales de poder alternativos a la hegemonía estadounidense. Un planteamiento que condujo al estrechamiento de las relaciones con socios como la República Popular China, el mundo árabe o la Unión Europea, mientras se apostaba por un distanciamiento de EEUU.

La proyección práctica de estos planteamientos ideológicos generó problemas a Chávez con vecinos y aliados de Venezuela. Los crecientes indicios del respaldo prestado por sectores radicales del "chavismo" a grupos izquierdistas violentos en Colombia, Ecuador o Bolivia provocaron tensiones entre Caracas y las capitales vecinas. Este tipo de sospechas unidas al acercamiento venezolano a regímenes como el cubano o el iraquí también trajeron aparejado un rápido deterioro de las relaciones con Washington. Al mismo tiempo, semejante giro en los alineamientos tradicionales de la política exterior de Venezuela provocó fuertes reacciones

de protesta en el interior del país. Numerosos sectores de la opinión pública manifestaron su desacuerdo con la venta de petróleo subvencionado al régimen cubano cuando la economía venezolana parecía incapaz de resolver problemas como el déficit público y el desempleo. Asimismo, las fuerzas armadas, con una trayectoria fuertemente pronorteamericana, manifestaron una profunda irritación por el nuevo rumbo internacional del país que amenazaba con incidir negativamente en el trato preferencial del que habían disfrutado hasta la llegada de Chávez al poder en lo relativo al suministro de material y adiestramiento procedente de EE.UU.

De este modo, el programa bolivariano de Hugo Chávez, que incluía cambios radicales en el sistema político, las fuerzas armadas, la economía y la política exterior, chocó con los intereses y la cultura política de amplios sectores de la sociedad venezolana. En consecuencia, el régimen se enfrentó a fuertes dificultades para llevar adelante un proyecto ideológico que no era compartido por colectivos tan diversos como empresarios, sindicatos o fuerzas armadas. Las dificultades para imponer el programa bolivariano se hicieron particularmente graves ante lo frágil y rudimentario de los instrumentos de movilización popular en manos del régimen "chavista". Tanto en su escalada hacia el poder como cuando ya alcanzó el gobierno, el presidente Chávez cimentó su apoyo popular sobre tres estructuras políticas. Por un lado, un partido político denominado Movimiento Quinta República (MVR) que se convirtió en el mecanismo para competir electoralmente y asumir el control de los puestos claves del Estado. Por otra parte, un sindicato conocido como Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) que quiso asumir el papel de organización laboral del régimen. Finalmente, el MBR-200 que tras la decisión de Chávez de entrar en política electoral se transformó en un movimiento de masas encargado de llevar la ideología bolivariana a la sociedad haciéndose presente en lugares de trabajo, comunidades de vecinos, centros de enseñanza, etc. Todas estas organizaciones demostraron una sustancial falta de cohesión y una escasa capacidad de acción política.

De hecho, las organizaciones bolivarianas demostraron un déficit crónico de cuadros experimentados en la movilización de masas y la acción política. La incapacidad de las formaciones partidarias y sindicales "chavistas" para arraigar de forma permanente entre las clases populares y la visible improvisación en los actos públicos del régimen son otras tantas muestras de esta falta de profesionalismo. Al mismo tiempo, muy pronto, el movimiento "chavista" comenzó a ser corroído por casos de corrupción que drenaron sus recursos financieros y dañaron su credibilidad. Asimismo, las organizaciones bolivarianas dieron muestras de continuas disensiones internas que les impidieron mantener una línea de actuación coherente. En buena medida, esta fragmentación fue un reflejo inevitable de los orígenes políticos dispares de todos los que se adhirieron al "chavismo". Un grupo heterogéneo que incluyó a ex-militares implicados en los intentos golpistas de 1992, militantes de la izquierda revolucionaria y antiguos miembros de partidos históricos venezolanos como la Unión Republicana Democrática (URD). Sobre esta diversidad, el "chavismo" fue incapaz de articular sus planteamientos ideológicos dentro de un cuerpo doctrinal sólido que diese unidad a su militancia y permitiese ofrecer al electorado una alternativa de aspecto coherente.

Las dificultades del régimen bolivariano para mantener una imagen política cohesionada ante la opinión pública venezolana se agudizaron en la medida en que el "chavismo" apostó por formar coaliciones amplias donde se integraron formaciones políticas muy heterogéneas con los únicos puntos en común de apoyar a la figura del ex –teniente coronel y rechazar el tradicional sistema bipartidista venezolano. De este modo, Chávez se presentó a los comicios de 1999 y luego a los del 2000 al frente de una alianza partidaria denominada Polo Patriótico que situaba al lado del MVR al Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento al Socialismo (MAS) o la formación izquierdista La Causa Radical (LCR) entre otros. Algunas de estas formaciones respaldaron al movimiento "chavista" con unos cuadros profesionales y una experiencia política de los que carecía en gran medida. Sin embargo, con el paso del tiempo, las contradicciones del MVR con sus socios políticos se acrecentaron hasta el punto de que muchos de ellos terminaron por abandonar la coalición y pasar a las filas de la oposición. En cualquier caso, la heterogeneidad del Polo Patriótico, el radicalismo de los partidos que lo integraban y las continuas querellas entre ellos añadieron confusión a la práctica política del régimen y contribuyeron a crear una sensación de desgobierno en la opinión pública.

De este modo, Hugo Chávez se encontró con unos ineficaces instrumentos de movilización popular al frente de un proyecto de cambio radical que no contaba con un apoyo social mayoritario. En principio, esta situación condenaba al presidente a optar por la rectificación ideológica o el descarrilamiento de su proyecto político. Sin embargo, varios factores han dado a Hugo Chávez la posibilidad de perseverar en la implantación de su modelo ideológico. Para empezar, la constitución aprobada en 1999 ha funcionado como un cerrojo que facilita la permanencia en el poder de Chávez con un amplio margen de maniobra política. De hecho, el texto constitucional no sólo otorga amplios poderes al presidente sino que además prolonga su mandato a seis años y permite una reelección con lo que hace legalmente posible la permanencia en el poder del jefe del Estado por un total de doce años. Sobre la base de este texto constitucional, los éxitos electorales del gobierno bolivariano en los comicios regionales, parlamentarios y presidenciales del año 2000 han otorgado al "chavismo" un control prácticamente total de las instituciones políticas del país. Además de monopolizar el ejecutivo, los seguidores de Hugo Chávez tienen el control de la Asamblea Nacional, los órganos rectores de los poderes judicial, electoral y ciudadano así como de un número importante de gobernaciones de los estados que componen Venezuela. Como consecuencia, la oposición ha carecido de los medios institucionales para condicionar las políticas del régimen y, llegado el caso, forzar el desalojo presidente.

Al mismo tiempo, Chávez se ha mostrado insensible a las crecientes señales que indicaban una pérdida del respaldo popular de que disfrutó inicialmente su gobierno. En particular, el jefe del Estado venezolano ha respondido con agresividad a las críticas contra su proyecto ideológico y su forma de ejercer el poder vertidas desde muy diversas instancias políticas y sociales. Muestras de este rechazo a cualquier voz disidente han sido sus amenazas a la prensa crítica y sus descalificaciones públicas contra los

partidos opositores. En este sentido, Hugo Chávez ha ido descartando las posibles vías para modificar la trayectoria de su gobierno con vistas a recuperar apoyo social y ha apostado por impulsar el "Proceso" entendido como el camino para profundizar en los objetivos de la ideología bolivariana. En buena medida, esta resistencia de Chávez a realizar concesiones sustanciales a la oposición tiene su explicación en dos factores. Por un lado, el ejercicio del poder del mandatario venezolano está marcado por unos planteamientos ideológicos de notable rigidez que dejan escaso margen a pactos y compromisos. Por otra parte, Chávez se siente investido de una legitimidad revolucionaria basada en su supuesta capacidad para interpretar la voluntad del pueblo. Desde esta convicción de estar impulsando un proyecto de cambio radical respaldado por las masas, el presidente se resiste a realizar cualquier concesión significativa dentro de su programa de gobierno y tiende a percibir a cualquier sector opositor como un enemigo de los intereses populares.

Como consecuencia de todo lo dicho, el escenario político venezolano parece encontrarse en un punto de bloqueo. El presidente Chávez parece decidido a continuar presionando a favor de un cambio radical que choca con la resistencia de amplios sectores sociales. Al mismo tiempo, una oposición escasamente representada en las instituciones se ve incapaz de forzar un cambio en la orientación de un gobierno apoyado en una constitución hecha a su medida. La paradoja se hace aún más aguda si se tienen en cuenta dos factores adicionales. Por un lado, la visión de Chávez de su gobierno como un proyecto revolucionario hace poco probable que esté dispuesto a realizar concesiones sustanciales a los grupos políticos y sociales críticos. Por otra parte, el movimiento bolivariano carece de formaciones políticas o sindicales sólidas que puedan actuar como palancas de movilización popular para provocar un cambio a su favor en la correlación de fuerzas sociales. Ante esta situación de parálisis, el deterioro de las constantes económicas y el crecimiento de la irritación social tenderá a agudizar las presentes tensiones políticas. Este proceso de crisis podría desembocar finalmente en una intervención castrense para apartar al presidente Chávez del poder. Semejante desenlace cambiaría radicalmente el escenario político venezolano; pero dejaría pendientes dos problemas irresueltos que determinarán el futuro próximo de Venezuela: la necesidad de reconstruir un sistema político apoyado en un amplio consenso y la búsqueda de un modelo de desarrollo económico eficiente capaz de reforzar la cohesión social.

Bibliografía

Agustín Blanco Muñoz, *Habla el comandante*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998.

José Vicente Carrasquero, Thais Maingon, Friedrich Welsch (ed.), *Venezuela en transición : elecciones y democracia 1998-2000*, CDB Publicaciones, Caracas, 2001.

Alberto Garrido, *La historia secreta de la revolución bolivariana*, Editorial Venezolana C. A., Mérida (Venezuela), 2000.

Alberto Garrido, *La revolución bolivariana. De la guerrilla al militarismo*, Producciones Karol C. A., Merida (Venezuela), 2000.

Alberto Garrido, *Mi amigo Chávez. Conversaciones con Norberto Ceresole*, Producciones Karol C. A., Merida (Venezuela), 2001.

Domingo Irwin, *Relaciones civiles-militares en el siglo XX*, El Centauro, Caracas, 2000.

John V. Lombardi, *Venezuela. La búsqueda del orden. El sueño del progreso*, Crítica, Barcelona, 1985.

**Centro de Estudios y Análisis de Seguridad
Universidad de Granada**

<http://www.ugr.es/~ceas>